



En los últimos veinte años, el peso de la Industria en el conjunto del PIB español ha caído unos seis puntos porcentuales, pasando de representar casi el 20 por ciento en 1995, a poco más del 14 por ciento en 2016, con una pequeña recuperación desde los mínimos del 13,2 por ciento registrados en el periodo 2009-2012.

El empleo industrial también se ha reducido hasta suponer en 2016 el 12,5 por ciento del total, cuando en 2014 era en 13,7 y en 2006 superaba el 16 por ciento, muy lejos en todo caso de las cifras registradas en los años 70 cuando la Industria llegó a emplear al 34 por ciento de los trabajadores.

Hoy son unos 2,3 millones de trabajadores los que prestan sus servicios en empresas industriales, con porcentajes de jornada completa del 94,5 por ciento y de contratos indefinidos del 78,7, cifras muy superiores a las del resto de los sectores económicos. Los empleos industriales además de la estabilidad y la continuidad, ofrecen un componente de formación y un nivel salarial más altos.

Pero las bondades de la Industria no se quedan en sí misma, y su actividad, mejora y dinamiza las del resto de los sectores, mejora la competitividad y la productividad globales, y cada euro de incremento en su demanda final lleva aparejado un aumento en el valor de la producción del conjunto de la economía de 3,11 euros.

La Industria es el sector que más impulsa la competitividad de una economía, y su efecto tractor, su capacidad de innovación, de mejorar el entorno económico y social y de catalizar el crecimiento a largo plazo, son sus mayores señas de identidad y en España, en línea con la tendencia mayoritaria en la Unión Europea, durante la expansión económica que acabó en 2007, se extendió la idea de que era posible mantener la potencia industrial, trasladando a países más competitivos en costes una parte importante de la producción.

Ese planteamiento que la crisis ha venido a desmontar en muchos casos dolorosamente, se tradujo en una falta de incentivos y de políticas de fomento de la Industria de los que el mejor exponente es aquel malhadado lema de que la mejor política industrial es la que no existe.

La falta de política industrial se ha mostrado devastadora y ha ayudado al traslado de la actividad industrial a países emergentes que han sabido valorar y aprovechar la oportunidad que les ofrecía el desinterés de las economías europeas por su Industria.

Esos países aprovecharon la oportunidad que les ofrecían economías más maduras, absorbieron conocimientos, crearon sus propias estructuras industriales, formaron profesionales, extendieron redes comerciales y crearon un "ecosistema industrial" que actualmente les permite competir con éxito.

Mientras tanto, los países "exportadores de industria", entre ellos en España, perdieron cantidad y calidad de producción, y capacidad para desarrollar nuevos productos y servicios. Se ha reducido su capital industrial, material y humano y el nivel y la calidad del empleo, provocando una caída de la competitividad global.

Este proceso ha supuesto en Europa un traslado de inversión y empleo industrial a actividades de menor valor añadido y resistencia ante a los ciclos económicos, con la consecuencia de que franjas importantes de población, antes ocupadas en la Industria e instaladas en el bienestar de las clases medias, han visto rebajados sus salarios y amenazados sus empleos.

Hoy, entre las mayores incertidumbres que se proyectan sobre el futuro de España en términos de progreso económico y social están el empleo estable y bien remunerado, la competitividad externa e interna, la innovación, la viabilidad de nuestro modelo de protección social, especialmente la de las pensiones, o la sostenibilidad medioambiental.

Pero en cualquier solución que se quiera ofrecer a esos problemas, directa o indirectamente, está la actividad industrial, porque no existen posibilidades reales de responder correcta y eficazmente a esas incertidumbres que no pasen por potenciar la Industria.

Únicamente con una Industria fuerte, productiva y competitiva como base de la economía podrá mantenerse la prosperidad y el estado del bienestar, preservando el medio ambiente a través de la innovación y con empleo cualificado y estable.

Pero la reindustrialización, hoy el primer reto económico de nuestro país y la mejor arma contra el paro estructural que sufrimos, exige políticas de Estado que permitan derribar las trabas y obstáculos estructurales que rebajan el atractivo a la inversión industrial y lastran su desarrollo.

La recuperación del peso industrial en nuestro país exige un Pacto de Estado por la Industria que permita implantar políticas eficaces, y un compromiso de la sociedad para que los agentes sociales, todas las administraciones y los partidos políticos, sitúen la actividad industrial en el centro de su interés y sus esfuerzos para enfrentarse a los grandes desafíos de España para impulsar su Industria que es tanto como decir impulsarse.

La Industria necesita un suministro de energía competitivo y seguro, modernizar infraestructuras y redes, mejorar las interconexiones internacionales eléctrica y gasista, la definición de un mix de generación equilibrado y generar eficiencia en el mercado y estabilidad en el sistema.

Para ser competitiva, la Industria ha de tener una elevada productividad lo que exige excelentes infraestructuras y medidas regulatorias que incrementen las capacidades de transporte y faciliten el acceso a los mercados. Es necesario invertir en infraestructuras realmente productivas, y estimular la demanda y el consumo de bienes industriales.

Junto al ello, es necesario promover la internacionalización de nuestras empresas industriales y defender sus intereses en el desarrollo de las políticas y los tratados comerciales, para remover los obstáculos que existen para su salida al exterior.

En el terreno de la innovación, el desarrollo tecnológico y la digitalización de las empresas se juega buena parte del futuro industrial que necesita sofisticados bienes de equipo y sistemas, y un personal muy bien formado para aprovecharlos y hacerlos eficientes y rentables.

La formación es también clave para las empresas industriales que necesitan que se facilite el aprovechamiento del talento y la cualificación de sus trabajadores lo largo de toda su trayectoria laboral.

La fragmentación del mercado interior que sufre nuestra economía tiene efectos perversos para nuestra Industria y es necesario que el marco regulatorio proteja los principios de unidad de mercado y evite la inseguridad jurídica que genera la actual sobrerregulación.

Esa descoordinación entre Estado y Autonomías, a la que se suman en muchas ocasiones los entes locales, castiga la competitividad global de las empresas, distorsiona la competencia y ha generado un marco fiscal que desincentiva la actividad industrial y la inversión.

En materia fiscal, se ha de combatir el fraude, coordinar las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales y reducir el Impuesto sobre Sociedades, muy especialmente para las Pymes que constituyen el núcleo de la Industria Española.

Además, la legislación en materia de cambio climático y de comercio de derechos de emisión puede situar en situaciones de desventaja a las empresas españolas frente a competidores más laxos en ese terreno.

Los problemas de financiación de las empresas industriales españolas, muchos de ellos ligados a su tamaño reducido, recomiendan impulsar políticas que favorezcan el crecimiento y el redimensionamiento empresarial.

Pero, la Industria necesita fundamentalmente la voluntad y el esfuerzo del conjunto de la sociedad y de las administraciones, para que todos esos desafíos se afronten desde un compromiso global con el progreso económico y el bienestar social que genera la actividad industrial.

***Las verdaderas necesidades
de la Industria***